

SINOPSIS DE LA CUESTIÓN



Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

LLEVANDO A LA PRÁCTICA EL DESARROLLO SOSTENIBLE: LA GOBERNABILIDAD IMPORTA

Muchas de las deficiencias detectadas en la aplicación de los principios de desarrollo sostenible acordados en la Cumbre de la Tierra de 1992, en Río de Janeiro, reflejan debilidades a escala mundial, nacional y local en los mecanismos de gobernanza. El primer borrador del documento final de Río+20 reconoce que la gobernabilidad es esencial para promover el desarrollo sostenible (párrafos 22 y 44). Frente a los retos de las desigualdades socioeconómicas y las injusticias ambientales se requiere más y mejor capacidad institucional para una gobernabilidad incluyente.

Regreso a lo básico: valores y principios normativos

Río+20 ofrece una oportunidad para vincular más estrechamente el desarrollo sostenible a los valores y principios –derechos humanos, equidad de género, integridad– que forman el núcleo de trabajo de las Naciones Unidas. Gobernabilidad responsable y participativa e imperio de la ley son elementos necesarios para la implementación de políticas que sean económica, ambiental y socialmente sostenibles. Por el contrario, los procesos de desarrollo que no se alinean con estos valores amenazan las perspectivas de desarrollo sostenible. Por ejemplo, una definición poco clara de los derechos de propiedad y una tenencia ineficaz de la tierra pueden excluir a las comunidades indígenas y dependientes de los bosques de los beneficios potenciales asociados con la Iniciativa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques. Junto con otras agencias de la ONU, el PNUD colabora con las instituciones nacionales para incluir a los grupos de población más pobre y marginada en las decisiones económicas, sociales y ambientales que les afectan.

Las carencias en las capacidades de ejecución y gobernabilidad siguen siendo un desafío

Tanto el primer borrador del documento final Río+20 como la evaluación de los resultados de ejecución de las convenciones y compromisos globales reconocen las deficiencias prácticas de los intentos por integrar las tres vertientes (económica,

Esferas de importancia para el PNUD en el ámbito de la gobernabilidad democrática:

- fomentar la participación inclusiva;
- potenciar instituciones de gobierno eficaces;
- alinear las instituciones y políticas nacionales de gobernabilidad con los principios internacionales.

social, ambiental) del desarrollo sostenible. Las perspectivas de mejora de estos datos dependen a menudo de la mejora de la capacidad institucional y la calidad de la gobernabilidad. Un sector público funcional, que dé respuestas y esté sujeto a rendición de cuentas es fundamental para convertir las políticas integradas en resultados de desarrollo integrados. La cooperación Sur-Sur y el apoyo al desarrollo de capacidades son necesarios para ayudar a los países en desarrollo a absorber las mejores prácticas y las tecnologías innovadoras necesarias para evitar vías de desarrollo de alto poder de emisión de carbono, y a la vez reducir la pobreza y la desigualdad.

La gobernabilidad no es un concepto esotérico: es algo que la población experimenta en sus interacciones diarias con los funcionarios locales y los proveedores de servicios. La descentralización, la participación y el compromiso local son necesarios para capacitar a los ciudadanos a "pensar globalmente y actuar localmente". El PNUD promueve estos valores con su apoyo a los procesos de desarrollo sostenible surgidos de la base e impulsados por los países.

La experiencia de la implementación de estrategias nacionales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio reducir la pobreza muestra que la vigilancia ciudadana de los servicios, los presupuestos y la infraestructura puede acelerar los avances hacia el desarrollo sostenible. La buena gobernanza, particularmente en términos de rendición de cuentas y transparencia en la prestación de servicios, a menudo es esencial para mejorar el acceso a los servicios básicos. El PNUD colabora con más de 100 países para desarrollar las capacidades institucionales que requieren los gobiernos y comunidades locales para gestionar mejor la prestación de servicios sobre el terreno. El PNUD también ayuda a mejorar los sistemas de contratación pública y fortalecer la integridad y las instituciones de orden público.

De los ODM a los ODS

En el diseño y la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), será preciso garantizar el desarrollo de las capacidades institucionales en los países del programa, en particular a la luz de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales y las libertades que prometen las convenciones de la ONU. Río+20 puede contribuir a articular los principios guía en la delimitación de los ODS. En la medida de lo posible, éstos deberían tratar de acompañar el progreso hacia los valores universales expresados en la [Carta de las Naciones Unidas](#), la justicia, la paz y la seguridad, como se reafirmó en la [Declaración del Milenio](#).

Construir un consenso más amplio para Río+20

La aplicación de los principios del desarrollo sostenible requiere una amplia participación, en términos de compromiso activo, de las tres ramas de gobierno (legislativa, ejecutiva y judicial), así como de los actores no estatales (sociedad civil y sector privado). Por ejemplo, al establecer mecanismos voluntarios nacionales de examen del desarrollo sostenible debería hacerse participar a representantes parlamentarios y de la sociedad civil, a fin de garantizar la legitimidad y la eficacia de los exámenes.

Río+20 debería también responder a las necesidades de los grupos vulnerables, como jóvenes, mujeres, minorías y personas con discapacidad. Fomentar la participación inclusiva y el compromiso ciudadano puede contribuir a transmitir contenidos a la opinión pública, influir en la agenda y el discurso políticos y potenciar la responsabilidad de los funcionarios electos.

Con este fin el PNUD colabora con los países para fortalecer las leyes, las instituciones y los procesos electorales, así como para proporcionar acceso a la información, la gobernabilidad electrónica y unos medios de comunicación independientes, a fin de conseguir una mayor participación cívica.

El sector privado –a través de sus inversiones, innovaciones y capacidad de gestión– puede tener un papel clave en la promoción de las transiciones nacionales hacia el desarrollo sostenible. Son necesarios entornos de negocios que promuevan el estado de derecho a través de reglas claras, transparentes y previsibles para la formulación de políticas, con el fin de liberar el potencial del sector privado de pleno desarrollo. Unos acuerdos de asociación del sector público y el sector privado cuidadosamente diseñados e implementados pueden ayudar a extender los servicios a las comunidades marginadas y vulnerables.

Gobernabilidad local para un desarrollo sostenible

Las debilidades nacionales en la aplicación de los principios del desarrollo sostenible a menudo van acompañadas de deficiencias en los sistemas de gobernanza mundial, como se ha demostrado en la actual crisis económica y financiera. Por lo tanto, Río+20 debería ayudar a mejorar los resultados de desarrollo, en consonancia con el principio de mutua rendición de cuentas de [la Declaración de París](#). Los mecanismos de vigilancia propuestos en el borrador preliminar del [documento final](#) Río+20 pueden ayudar a aumentar el cumplimiento voluntario de los compromisos de desarrollo sostenible.

Justicia ambiental en Filipinas

En 2008, el PNUD y la Corte Suprema reconocieron que, si bien en Filipinas existen programas de protección del medio ambiente en curso, hay pocas vías para garantizar la rendición de cuentas de la gestión eficaz de los recursos, hacer cumplir las leyes ambientales o evitar daños al medio ambiente. Por consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, en colaboración con el PNUD, implementó el proyecto *Enhancing Access to the Pillars of Justice* (Mejorar el acceso a los pilares de la justicia), que incluye un componente importante de justicia ambiental.

En el marco de esta iniciativa, se convocó un Foro sobre Justicia Ambiental que reunió a más de 600 participantes, para discutir la aplicación de la legislación ambiental. Las Reglas de procedimiento para casos ambientales, promulgadas en 2011 con el apoyo del Foro, están ayudando a proteger los derechos ambientales que establecen la Constitución de Filipinas y los convenios internacionales de los que el gobierno de Filipinas es signatario. He aquí algunos ejemplos específicos de protección del medio ambiente que estos cambios han hecho posibles:

- la Corte Suprema de Justicia dictó el primer requerimiento ambiental del país con el fin de obligar a las empresas involucradas a limpiar un derrame de petróleo de un importante oleoducto;
- la Corte Suprema emitió una orden por la que se requiere la rehabilitación de la bahía de Manila, y ha formado un comité asesor para supervisar el cumplimiento de la orden;
- se han emitido mandatos de protección del medio ambiente en relación con la minería en Surigao y con las plantas de energía que utilizan carbón en Cebú.
- Estas decisiones están ayudando a mejorar la salud pública y la calidad ambiental en las comunidades locales.

Entre otros ejemplos de procesos de examen aceptables por los Estados miembros y que pueden servir como mecanismos de aprendizaje entre pares están el Examen Periódico Universal, los mecanismos de ejecución de la [Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción](#), y el [Mecanismo de examen entre los propios países africanos](#). Asimismo, se dispone de mecanismos voluntarios de examen para una mejor gestión de los recursos, como la Iniciativa para la [Transparencia de las Industrias Extractivas](#) y el [Proceso de Kimberly](#).

Los mecanismos eficaces y probados de apoyo a la gobernabilidad, destinados a apoyar las transiciones nacionales hacia el desarrollo sostenible, están ahí. Y el PNUD está dispuesto a ayudar a gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad civil a hacerlos efectivos de la manera más eficaz.

Contactos de información:

Phil Matsheza (phil.matsheza@undp.org)

Tsegaye Lemma (tsegaye.lemma@undp.org)